



La red social o cómo desnudar al rey

Desde la óptica que le da ser el coordinador de Lupa Ciudadana, Fernando García Ramírez analiza el potencial extraordinario que tiene internet como herramienta de la sociedad para fiscalizar los poderes públicos.

No existe en nuestro idioma traducción de la palabra inglesa *accountability*, pero hablar de “contabilidad social” es una primera aproximación; “rendición de cuentas”, otra. Porque el hombre miente y se equivoca, se inventó la contabilidad. Porque el hombre público, como todos, miente y se equivoca, aunque con un radio de afectación mucho mayor, se inventó la “contabilidad social”.

No basta, en ningún lugar del mundo, la honradez y la decencia, es preciso que el poder público sea auditado y vigilado, controlado. Existen muchas modalidades: la transparencia, el cogobierno ciudadano, los comités de vigilancia. Internet, como en casi todas las esferas, ha potenciado su poder de acción. El caso de la transparencia es ejemplar. No es suficiente con que el gobierno informe, es imperativo que se abra, que coloque todo lo que sea de interés público en ese enorme escaparate que es la red.

Lo entendió así el juez británico Lord Hutton. En 2003, cuando aceptó la atroz encomienda de investigar la misteriosa muerte del doctor David Kelly. Científico renombrado, el doctor Kelly había concluido que la información que el gobierno de Tony Blair manejaba en relación con las armas de destrucción masiva iraquíes era falsa, y tendía a crear la necesidad –del todo artificial– de derrocar a Saddam Hussein. Al hacerse pública la posición de David Kelly, comenzó el terrible acoso de los medios. Pronto, la presión sobre el

doctor Kelly se hizo insoportable. Una mañana amaneció muerto en el interior de su automóvil. El gobierno de Blair fue señalado por la opinión pública como el culpable del deceso. Blair se comprometió a esclarecer la verdad. Encargó al honorable Lord Hutton que se hiciera cargo de la investigación. Lord Hutton aceptó esa endiablada encomienda con una condición: que todo el proceso fuera transparente. De inmediato se creó un portal de internet (www.the-hutton-inquiry.org.uk) en el que el ciudadano común podía seguir, paso a paso, todo el proceso, incluyendo las transcripciones completas de los interrogatorios. Pocos meses después, Lord Hutton concluyó que el doctor Kelly se había suicidado. Esa polémica decisión fue aceptada de inmediato porque el asunto había sido llevado, en todo momento, públicamente. La transparencia es un factor que ayuda a la gobernabilidad. Asistimos recientemente a un proceso semejante, cuando la Suprema Corte decidió hacer público el borrador de la sentencia de un ministro, en el caso de la controvertida Ley Televisa, así como transmitir íntegras las sesiones de la Corte por televisión. Al transparentar el proceso, la Suprema Corte encontró en la ciudadanía una aliada; el éxito de la estrategia fue definitivo.

Durante la campaña por la Presidencia en el 2006, diversas encuestas confiables señalaron que la corrupción se encontraba como una de las cinco preocupaciones centrales de los mexicanos. Sorprendentemente, el tema apenas fue tocado por los candidatos. López Obrador, en casi todos sus discursos, clamaba contra la corrupción, pero no formuló ninguna propuesta práctica para combatirla (abatir la corrupción no fue, como gobernante, su carta mayor, como lo mostró el caso de Gustavo Ponce, su tesorero, que presumía sus autos

de lujo y que en Las Vegas perdía casi cada fin de semana decenas de miles de dólares.) Roberto Madrazo, con asesores desorientados, propuso algo que ya figuraba en la Constitución. Felipe Calderón, por su lado, se comprometió a extender los alcances de la ley de transparencia a niveles estatales y, más importante aún, municipales. La iniciativa, signada por todos los partidos, se envió a finales el 2006 y el Congreso la aprobó (www.lupaciudadana.com.mx/sacscms/xstatic/lupa/template/ley.aspx?l=228.) Sus efectos en el futuro, en relación con la lucha contra la corrupción, serán enormes. El proceso para obtener información se ha multiplicado con el nuevo portal del IFAI (www.ifai.org.mx) y con la confianza que los ciudadanos comunes han ido adquiriendo en solicitar y obtener respuestas de las acciones, omisiones y comisiones del poder público federal. Más de doscientas mil solicitudes se han recibido tan sólo en la primera mitad de este 2007.

Pero ¿para qué sirve en los hechos la contabilidad social y cuál es su futuro? Primero precisemos: los ejercicios de *accountability* ciudadana todavía, en nuestro país, están en pañales. En esto radica su enorme futuro. Realizados por organizaciones no gubernamentales, los ejercicios de vigilancia ciudadana son contados: Fundar (www.fundar.org.mx), Sociedad en Movimiento (www.sociedadmovimiento.org.mx), el Centro de Estudios Espinosa Iglesias (www.ceey.org), la Fundación Este País (www.estepais.org), el CIDE (www.presupuestoygastopublico.org), Transparencia mexicana (www.transparenciamexicana.org.mx), Alianza Cívica (www.alianzacivica.org.mx), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé (www.laneta.apc.org/cdhbcasas/index.html) y Lupa Ciudadana (www.lupaciudadana.com.mx). En otras latitudes sirven para medir la eficiencia del poder público, para exhibir los vicios de su funcionamiento, para ofrecer a la población información relevante (presupuesto, nóminas, investigaciones, reglamentos, minutas, etc.). En Estados Unidos es ejemplar, en este sentido, lo que hace la *Government Accountability Office* (www.gao.gov). El presidente Bush podrá anunciar con bombo y platillos que destinará cientos de millones de dólares para reconstruir Nueva Orleans, pero la GAO rastrea las partidas y las expone (por lo que el público norteamericano pudo enterarse de que sólo un porcentaje, mucho menor de lo ofrecido, llegó en forma de ayuda directa a los damnificados).

Sitios como el colombiano (www.bogotacomovamos.org), que ofrece una excelente radiografía crítica de una ciudad, o el argentino Resultados del Estado (www.resultadosdelestado.org), que proporciona una serie de indicadores que permiten al ciudadano darse cuenta de la buena o mala marcha de los

asuntos administrativos, alientan a pensar que Latinoamérica se dirige a una etapa de transparencia y rendición de cuentas. Tal vez se trate de un espejismo, de casos aislados, pero el futuro está tocando la puerta con insistencia. Y nosotros nos seguimos obstinando en no querer escuchar.

Ese futuro tiene la cara de una computadora de menos de cien dólares. En la India, en los próximos años, piensan literalmente inundar el mercado con cientos de millones de computadoras de setenta dólares, con acceso a internet pero sin memoria (se prevé el auge de las compañías dedicadas a proveer espacio de memoria virtual.) Desde Estados Unidos comienzan a llegar las computadoras de cien dólares. Muy pronto el acceso a internet se va a multiplicar exponencialmente. No es ilusorio pensar que en México la población con acceso a la red, veintidós por ciento, aumente a cincuenta por ciento en unos cuantos años. Esto, huelga decirlo, conllevará cambios sustanciales en la forma de hacer negocios, de divertirse y, por supuesto, de hacer política.

Ejercicios tan simples como conocer el sentido de las votaciones de nuestros legisladores en las Cámaras, sus asistencias y sus participaciones en tribuna, eran hasta hace poco inaccesibles al ciudadano común. Hoy, organizaciones como Monitor legislativo (www.monitorlegislativo.org) y Lupa Ciudadana realizan esa labor, que apenas comienza. Seguir la “ruta del dinero”, esto es, seguir minuciosamente el camino de las partidas presupuestales federales, desde su salida de Hacienda hasta su final aplicación —en forma de salario u obra pública— en los más remotos municipios, es algo perfectamente viable.

Podemos, así, ser testigos de las filtraciones, desvíos y corrupciones que se pueden presentar en el camino del presupuesto. La opacidad es hermana de la corrupción.

La vigilancia del poder público sobre nosotros es inoculable (bajo esquemas de cooperación contra el terrorismo, hay programas en marcha de intercepción de llamadas y de espionaje de correos electrónicos; pero también de acuerdo con prácticas comunes, como las que la Secretaría de Hacienda utiliza para inmiscuirse en nuestros asuntos). El *Big Brother*, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ampliará sin duda sus poderes. Pero del otro lado, y ésa es una realidad que Orwell no previó, está un *Little Brother* nada dispuesto a dejarse observar y esculcar pasivamente. Un *Little Brother* ciudadano que pide vigilar todos los actos del poder público, que exige conocer antecedentes, funciones, sueldos, actuaciones y evaluaciones de nuestros servidores. El desarrollo de lo que ahora está sólo en potencia nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos.

Si el Rey no va desnudo, hay que desnudarlo. —



Ilustraciones: Letras Libres / Gabriel Fragone